

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO
ORAL DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá, D.C., nueve (09) de junio de dos mil veintidós (2022)

PROCESO No:	11001-33-35-029-2022-00142-00
CONVOCANTE:	CÉSAR FUENTES MURILLO
CONVOCADO:	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
CONTROVERSIA:	CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

Ocupa al Despacho el estudio de la conciliación extrajudicial de la referencia, a fin de determinar si es competente para conocer del asunto y de ser así, establecer si debe aprobar o improbar dicho acuerdo conciliatorio.

I. ANTECEDENTES

El convocante, señor **César Fuentes Murillo**, en su calidad de funcionario llama a conciliación Superintendencia de Sociedades, con el fin de obtener reconocimiento y pago de las sumas de dinero correspondientes a las diferencias generadas al haber omitido la contabilización de la Reserva Especial del Ahorro en la liquidación de la prima de Actividad, la bonificación por Recreación y Viáticos.

Correspondió el conocimiento de la solicitud de conciliación a la Procuraduría 55 Judicial II Para Asuntos Administrativos, ante quien se llevó a cabo el acuerdo conciliatorio que ahora se estudia. (Folios 692 a 705, del Archivo 1 del expediente digital).

II. PRUEBAS

Obran en el plenario como pruebas relevantes las siguientes:

1. Solicitud de Conciliación elevada por la convocante ante la **Procuraduría General de la Nación**. (Folios 1 a 35, del Archivo 01 demanda).

2. Petición elevada por el convocante ante la Superintendencia de Sociedades – bajo el Radicado 2021-01- 054952 el día 26 de febrero de 2021, pretendiendo la inclusión de la Reserva Especial de Ahorro, para liquidar la Prima de Actividad, Prima de Servicios, la Bonificación por Recreación y/o Viáticos. (Fls. 192 y 193 del Archivo 01 del Exp. digital).
3. Oficio No. 2021-01-085872 del 18 de marzo de 2021, mediante el cual la Superintendencia de Sociedades, da respuesta a la petición elevada por el convocante, proponiendo fórmula conciliatoria para el periodo comprendido entre el 25 de mayo de 2018 al 26 de febrero de 2021. (Fls. 194 y 195 del Archivo 01 del Exp. digital)
4. Certificación expedida por el Coordinadora del Grupo de Administración de Personal de la Superintendencia de Sociedades, en la que consta la liquidación de la Bonificación por Recreación y la prima de Actividad con la inclusión de la Reserva Especial del Ahorro, para el periodo comprendido entre el 25 de mayo de 2018 y el 26 de febrero de 2021; que arroja un total de doce millones doscientos veinte mil doscientos dos pesos \$12.220.202 (Fls. 196 a 199 del Archivo 01 del Exp. digital)
5. Acta de Conciliación Extrajudicial celebrada los días 23 y 24 de septiembre de 2021, ante la Procuraduría 55 Judicial II para Asuntos Administrativos. (Fls. 692 al 705 Archivo 01 del Exp. digital)
6. Certificación expedida por la Superintendencia de Sociedades, en la que se hace constar que por Acta No. 12 de 2021 el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de esa entidad, decidió de manera unánime conciliar. (Fl. 726 del Archivo 01 del Exp. digital).

III. ACUERDO CONCILIATORIO

El acuerdo conciliatorio cuya aprobación se pretende, está contenido en el Acta de Audiencia con Radicación No. E-2021-2021-366779 del 23 de septiembre de 2021.

Asimismo, a la diligencia asistieron la convocante y la apoderada de la parte convocada, Superintendencia de Sociedades, quienes manifestaron de común acuerdo que concilian en los términos establecidos en la fórmula propuesta por el Comité de Conciliaciones de la entidad, que se señala a continuación:

“El Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Superintendencia de Sociedades, se reunió celebrada el día 21 de mayo de 2021 (acta No. 12-2021) estudió el caso del señor CESAR FUENTES MURILLO (CC 19.490.282) y decidió de manera UNÁNIME CONCILIAR las pretensiones de la convocante (Reserva Especial del Ahorro), por valor de \$12.220.202,00.

La fórmula de conciliación es bajo los siguientes parámetros:

1. Valor: Reconocer la suma de \$12.220.202,00 pesos m/cte., como valor resultante de re liquidar los factores solicitados, para el período comprendido entre el 25 de mayo de 2018 al 26 de febrero de 2021, incluyendo allí el factor denominado reserva especial del ahorro, a la liquidación efectuada por la entidad y aceptada por el convocante.

2. No se reconocerán intereses ni indexación, o cualquier otro gasto que se pretenda por la convocante, es decir, sólo se reconoce el capital conforme a la liquidación realizada por la entidad.

3. Se debe tener en cuenta la prescripción trienal de las sumas indicadas, conforme la certificación aludida.

4. Pago: Los valores antes señalados serán cancelados dentro de los 60 días siguientes a aquél en el que la Jurisdicción Contenciosa Administrativa apruebe la conciliación, no generando intereses tampoco en este lapso.

5. Forma de pago: El pago se realizará, mediante consignación en la cuenta que el funcionario tenga reportada en la entidad para el pago de nómina, salvo indicación en contrario de la solicitante, comunicada a la entidad al momento de elevar la petición de pago, o en todo caso, antes de efectuarse el pago respectivo.

Así mismo, la convocante acepta que no iniciará acciones contra la Superintendencia de Sociedades que tengan que ver con el reconocimiento de las sumas relativas a Prima de Actividad y Bonificación por Recreación, a que se refiere esta conciliación.

La presente certificación se expide con base en lo dispuesto en inciso 2 del Artículo 2.2.4.3.1.2.4. del Decreto 1069 de 2015, y en el artículo 6 de la Constitución Política.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá, D.C, a los 17 días del mes de noviembre de 2021.”

Seguidamente, la apoderada de la parte convocante manifestó aceptar en su totalidad la propuesta presentada por la Superintendencia de Sociedades, aceptando el pago, sin intereses ni ningún emolumento adicional.

Respecto a los requisitos de la conciliación, la Procuraduría 55 Judicial II, refirió:

“El planteamiento anterior tiene respaldo en los artículos 70 y 71 de la Ley 446 de 1998, que modifican los artículos 59 y 62 de la Ley 23 de 1991 y que señalan que es posible conciliar total o parcialmente conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de las diferentes pretensiones previstas en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En igual sentido,

el artículo 56 del Decreto 1818 de 1998, artículo 2.2.4.3.1.1.2 del decreto 1069 de 2015. Y en sentencias C – 1195 de 2001, T 023 – 2012; Se advierte además que el acuerdo conciliatorio fue autorizado por el Comité de Conciliación de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, según actas que se encuentran incorporadas al expediente.

Así mismo, el medio de control que se ha podido llegar a presentar no ha caducado (art. 61, ley 23 de 1991, modificado por el art. 81, ley 446 de 1998), como quiera que se trata de prestaciones sociales, la que de todas maneras se encuentran bajo los parámetros de la prescripción trienal. Por lo que existen elementos fácticos y jurídicos razonables que soportan la decisión de conciliar las pretensiones de la parte convocante. Aunado a lo anterior, obran en el expediente las pruebas necesarias que justifican el acuerdo, a saber:

De folio 36 al 688 del expediente obran derechos de petición en donde cada uno de los convocantes solicita la inclusión de la reserva especial de ahorro, en la liquidación de la prima de actividad, bonificación por recreación ,horas extras y viáticos a la entidad convocada, también se observan sendos oficios en respuesta a los pedimentos anteriores expedidos por parte de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, en donde plantea a los peticionarios una formula conciliatoria, junto a las certificaciones que contienen las liquidaciones efectuadas por la entidad convocada.

Así mismo, se encuentran en los anexos del expediente, los poderes debidamente otorgados al apoderado convocante y los traslados de la solicitud de conciliación enviados de manera previa a la parte convocada y a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

De igual manera, la solución propuesta por las partes no lesiona el patrimonio público de la Nación y evita un alto número procesos judiciales en el que el Estado tendría una alta probabilidad de condena, en la medida en que existen precedentes jurisprudenciales; que confieren los derechos que aquí se concilian.

Así las cosas, concurren los elementos necesarios para suscribir el presente acuerdo conciliatorio. Las partes entienden de esta manera dirimir totalmente la controversia suscitada con motivo de las sumas adeudadas, cuyo pago será solucionado en la forma en que ha quedado convenido. No obstante, el presente acuerdo conciliatorio quedará sometido a la aprobación del Juez Contencioso Administrativo que corresponda.

El presente trámite conciliatorio administrativo extrajudicial se desarrolló de conformidad con lo estatuido en las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998 y 640 de 2001, así como en el Decreto 1069 de 2015, y demás normas concordantes.

En consecuencia, se dispondrá el envío de la presente acta, junto con los documentos pertinentes, al Juzgado Administrativo del Circuito de Bogotá D.C. (reparto), para efectos de control de legalidad, advirtiendo a los comparecientes que el auto aprobatorio del acuerdo hará tránsito a cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo, razón por la cual no son procedentes nuevas peticiones conciliatorias por los mismos hechos ni demandas ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo por las mismas causas (art. 73 ley 446 de 1998 y 24 ley 640 de 2001). (Fls. 692 a 705 del Archivo 01 del Exp. digital)".

IV. CONSIDERACIONES

Esta Sede Judicial es competente para pronunciarse sobre la aprobación del acuerdo conciliatorio celebrado el día 23 de septiembre de 2022, entre el señor **César Fuentes Murillo** y la **Superintendencia de Sociedades**.

Debe recordar el Despacho que la conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa ha sido instituida como un mecanismo alternativo de solución de conflictos con el ánimo de lograr (cuando a ello hubiere lugar) un acuerdo entre las partes y así evitar el uso de acciones contenciosas en vía judicial, o en su defecto, servir como requisito de procedibilidad para la iniciación de aquellas.

Desde la expedición de la Ley 23 de 1991, modificada por la Ley 446 de 1998 y desarrollada por la Ley 640 de 2001, la conciliación se extendió hasta el campo de esta jurisdicción, siendo procedente únicamente sobre aquellos conflictos de carácter particular y contenido económico que se encuentren en el ámbito de su competencia, susceptibles de ser enjuiciados con ocasión de las acciones de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, contractuales, y de Reparación Directa. Lo anterior, por estricto mandamiento del artículo 59 de la mencionada Ley 23 de 1991, cuyo texto es del siguiente tenor:

"...Art. 59.- Modificado por el Art. 70, Ley 446 de 1998. Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales, sobre conflictos de carácter particular y contenido patrimonial que ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se ventilarían mediante las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo..."

En desarrollo de las normas referenciadas, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1716 de 14 de mayo de 2009 “[por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001]”, obra que contiene el ordenamiento que rige el procedimiento conciliatorio extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo.

Así, ha de observarse que la solicitud de conciliación haya reunido los requisitos establecidos por el artículo 6º del Decreto 1716 de 2009, que son los siguientes:

“(…)

- a)** La designación del funcionario a quien se dirige;
- b)** La individualización de las partes y de sus representantes si fuere el caso;
- c)** Los aspectos que se quieren conciliar y los hechos en que se fundamentan;
- d)** Las pretensiones que formula el convocante;
- e)** La indicación de la acción contencioso administrativa que se ejercería;
- f)** La relación de las pruebas que se acompañan y de las que se harían valer en el proceso;
- g)** La demostración del agotamiento de la vía gubernativa, cuando ello fuere necesario;
- h)** La estimación razonada de la cuantía de las aspiraciones;
- i)** La manifestación, bajo la gravedad del juramento, de no haber presentado demandas o solicitudes de conciliación con base en los mismos hechos;
- j)** La indicación del lugar para que se surtan las notificaciones, el número o números telefónicos, número de fax y correo electrónico de las partes.
- k)** La copia de la petición de conciliación previamente enviada al convocado, en la que conste que ha sido efectivamente recibida por el representante legal o por quien haga sus veces, en el evento de que sea persona jurídica, y en el caso de que se trate de persona natural, por ella misma o por quien esté facultado para representarla;
- l)** La firma del apoderado del solicitante o solicitantes; (…)”

En este mismo sentido, el Decreto No. 1365 del 27 de junio de 2013 “por el cual se reglamentan algunas disposiciones de la Ley 1564 de 2012, relativas a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado”, establece:

“...Art. 4.- Entrega de copia de solicitud de conciliación extrajudicial a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En desarrollo del artículo 613 de la Ley 1564 de 2012, el peticionario que solicite conciliación extrajudicial deberá acreditar la entrega de copia a la Agencia cuando el asunto involucre intereses litigiosos de la Nación, en los términos previstos en el parágrafo del artículo 2 del Decreto Ley 4085 de 2011 y el presente Decreto...”.

Igualmente, de conformidad con el marco jurídico vigente, para efectos de impartir la aprobación prevista en el artículo 24 de la Ley 640 de 2001, el juez de

conocimiento debe verificar que el acuerdo conciliatorio cumpla con ciertos presupuestos, a saber: *i)* Que verse sobre un asunto conciliable; *ii)* Que no afecte derechos fundamentales, ni atente contra el ordenamiento jurídico; *iii)* Que no sea lesivo para el patrimonio público; y, *iv)* Que no haya tenido como objeto asuntos en los cuales la acción a precaver se encuentre caducada.

Por otra parte y para efectos del presente asunto, se hace indispensable traer a colación la normatividad que regula las distintas prestaciones que fueron objeto de reclamación por parte del convocado. Es así, que debe tenerse en cuenta el Acuerdo 040 de 13 de noviembre de 1991, expedido por la Junta Directiva de la Corporación Social de la Superintendencia de Sociedades, el cual es aplicable, entre otros, a los funcionarios de la Superintendencia de Sociedades y cuyo artículo en relación con la reserva Especial de Ahorro, reza lo siguiente:

“ARTÍCULO 58. Contribución del Fondo de Empleados. RESERVA ESPECIAL DEL AHORRO. *Corporanónimas contribuirá con sus aportes al Fondo de Empleados de la Superintendencia de Sociedades y Corporanónimas. Entidad con personería jurídica reconocida por la Superintendencia Nacional de Cooperativas. Para tal fin pagará mensualmente a sus afiliados forzosos una suma equivalente al sesenta y cinco por ciento (65%) del sueldo básico, prima de antigüedad, prima técnica y gastos de representación; de este porcentaje entregará Corporanónimas directamente al Fondo el quince por ciento (15%) previa deducción de la cotización que sea del caso por concepto de la afiliación de los beneficiarios. Los afiliados forzosos contribuirán mensualmente al Fondo con el cinco por ciento (5%) de las asignaciones básicas mensuales fijadas por la ley...”*

Acerca del Órgano competente para el pago de prestaciones a favor de los empleados de las Superintendencias, es fundamental la regulación dispuesta por el artículo 12 del Decreto 1695 de 1997, que señala:

“Artículo 12. PAGO DE BENEFICIOS ECONÓMICOS.- *El pago de los beneficios económicos del régimen especial de prestaciones económicas de los empleados de las Superintendencias afiliadas a Corporanónimas, contenido en los Decretos 2739 de 1991, 2156 de 1992, 2621 de 1993, 1080 de 1996 y el Acuerdo 040 de 1991 de la Junta Directiva de Corporanónimas, en adelante estará a cargo de dichas superintendencias, respecto de sus empleados, para lo cual en cada vigencia fiscal se apropiarán las partidas presupuestales necesarias en cada una de ellas, en los mismos términos establecidos en las disposiciones mencionadas en el presente artículo...”*

CASO CONCRETO

Corresponde al Despacho analizar uno a uno los presupuestos previamente señalados, para así determinar si procede la aprobación del Acta de Conciliación

Prejudicial con Radicación No. E-2021-366779 del 12 de julio de 2021 - C, celebrada el día 23 de septiembre de 2021, por medio de la cual se acordó conciliar la prima de Actividad y la Bonificación por Recreación con la inclusión de la Reserva Especial de Ahorro, durante el periodo comprendido entre el **25 de mayo de 2018 al 26 de febrero de 2021**, sin el reconocimiento de intereses e indexación y pagar dicho factor dentro de los 60 días siguientes a la aprobación de la conciliación por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, por la suma de un doce millones doscientos veinte mil doscientos dos pesos (\$12.220.202).

Establecido lo anterior y descendiendo al asunto que ocupa el interés del Despacho, se advierte que:

1. La solicitud de conciliación extrajudicial elevada por la convocante y que obra a folios 1 al 35 del Archivo 01 demanda del Exp. digital, cumple con los requisitos señalados por el Decreto 1716 de 2009.
2. El asunto aquí debatido es perfectamente conciliable, por cuanto lo que fue objeto de arreglo entre las partes involucradas, hace alusión al reconocimiento y pago de factores salariales, a favor del señor **César Fuentes Murillo**.
3. El asunto conciliado versa sobre un derecho de contenido particular y económico, lo cual es de libre disposición por los acordantes, sin que con ello se afecte derecho fundamental alguno o vaya contra la ley o la jurisprudencia, toda vez que proviene de una obligación contraída por las partes conforme a la normatividad existente en materia laboral.
4. El acuerdo aquí celebrado no resulta lesivo para el patrimonio público, por cuanto la **Superintendencia de Sociedades** está reconociendo al señor **César Fuentes Murillo** el derecho que le asiste a percibir lo correspondiente a Prima de Actividad y Bonificación por Recreación que se causaron a su favor en relación con el factor de Reserva Especial de Ahorro. Sobre este particular, debe mencionarse que el derecho objeto de la presente conciliación fue estudiado por el Comité de Conciliación de la mencionada entidad en sesión del día 21 de mayo de 2021 (acta No. 12-2021), como consta en la respectiva certificación obrante a folio 726 – Archivo 01 Anexo del Exp. digital, y en la cual dicho Comité recomendó y autorizó, de forma

expresa, conciliar la presente controversia, de conformidad con la fórmula propuesta en pleno.

Asimismo, resulta pertinente destacar que de la estimación de los montos adeudados al convocado obra prueba correspondiente a una liquidación allegada al expediente contenida en certificación expedida por el Coordinador del Grupo de Administración del Talento Humano de la entidad, visible a folios 196 a 199 del Archivo 01 del Exp. digital, por lo que queda claro para el Despacho que el acuerdo conciliatorio al cual llegaron las partes se propuso dentro de un marco de razonabilidad y austeridad por parte de la entidad, siendo entonces dable concluir que el mentado acuerdo no es lesivo, como se indicó en precedencia, para el patrimonio público.

5. Finalmente, en lo que respecta a la Caducidad de la acción, esta Sede Judicial considera que el estudio de dicho fenómeno no procede para efectos de la aprobación del acuerdo conciliatorio, como quiera que el asunto materia de acuerdo es la liquidación de unos factores salariales (prima de Actividad, bonificación por Recreación) teniendo en cuenta la Reserva Especial del Ahorro, *(que de acuerdo al literal h) del artículo 42 del Decreto 1042 de 1998, se erige como factor salarial, entendido como la suma que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución de sus servicios)*; razón por la cual, al tratarse de reconocimientos periódicos, no pueden ser susceptibles de la ocurrencia de caducidad. Lo anterior, sin perjuicio de establecer que aún no ha culminado el término de cuatro meses relacionados con la interposición del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, frente a este asunto.

Así, se tiene entonces que la conciliación aquí estudiada cumple con los presupuestos de ley anteriormente enunciados, motivo por el cual resulta procedente su aprobación.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO ORAL DE BOGOTÁ**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO. - APROBAR la conciliación extrajudicial celebrada ante la Procuraduría 55 Judicial II para Asuntos Administrativos, los días 23 y 24 de septiembre de 2022 entre el señor **César Fuentes Murillo** y la **Superintendencia de Sociedades** representada a través de su apoderada judicial, por la suma de **DOCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS (\$12.220.202)** en la forma y términos indicados en el acta de conciliación extrajudicial reseñada y conforme a las consideraciones aquí expuestas.

SEGUNDO. - Por secretaría, expídase a la parte convocante primera copia auténtica que presta mérito ejecutivo del acuerdo conciliatorio y de la presente providencia junto con su respectiva constancia de ejecutoria.

TERCERO. - Por secretaría, expídase copia auténtica del acuerdo conciliatorio y de la presente providencia, con constancia de ejecutoria, destinada a la entidad convocada.

CUARTO. - En los términos y para los efectos del memorial poder obrante dentro del plenario, se reconoce personería adjetiva a la doctora Laura Alejandra Medina González, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.373.958, portador de la T.P. 203.427 del C.S.J. como apoderado de la parte convocante. Así mismo, se reconoce personería a la doctora Consuelo Vega Merchán, identificada con cédula de ciudadanía No. 63.305.358, portadora de la T.P. 43.627 del C.S.J., como apoderada de la Superintendencia de Sociedades.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ENRIQUE ARCOS ALVEAR
JUEZ

JNE – M.P.V.R

<p>JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ SECCIÓN SEGUNDA</p> <p>Por anotación en ESTADO notifico a las partes la providencia anterior</p> <p>Hoy 10 de JUNIO de 2022 a las 8:00 a.m.</p>
--

PARTES	CORREO ELECTRÓNICO
PARTE CONVOCANTE:	alejamedina221@hotmail.com ilugoe@gmail.com
PARTE CONVOCADA:	consuelov@supersociedades.gov.co notificacionesjudiciales@supersociedades.gov.co
MINISTERIO PÚBLICO: PROCURADOR 191 JUDICIAL PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	procjudadm191@procuraduria.gov.co